

San Martín, 21 de octubre de 2025.

**AUTOS Y VISTOS:**

Para resolver sobre el pedido de aplicación de la amnistía, formulado en los términos de la ley 27.743, a favor de **MARCELO OSCAR AÚN** (argentino, DNI n° 17.409.911, nacido el 9 de septiembre de 1965 en la ciudad bonaerense de Zárate, con domicilio real en 25 de mayo 94 de esa ciudad, con teléfono de contacto n° 3487-661386), **DARÍO VILLALBA BRIZUELA** (paraguayo, DNI n° 92.441.854 expedido por esta república, nacido el 3 de agosto de 1960 en Asunción, con domicilio real en Liniers 115 de la ciudad bonaerense de Campana) y **FEDERICO GERMÁN MEIER** (argentino, DNI n° 8.685.531, nacido el 26 de diciembre de 1947 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio real en Bravo 180 de la ciudad bonaerense de Campana), en el marco del **incidente n° 28** de esta causa **FSM n° 55.718/2019/TO1**, caratulada "**Aún, Marcelo Oscar y otros s/ asociación ilícita fiscal**", del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 de San Martín;

**RESULTA:**

**I.** Que, de acuerdo con las imputaciones realizadas por los órganos acusadores al tiempo de formular sus requerimientos de elevación a juicio, se atribuye a **Aún, Villalba Brizuela y Meier** haber formado parte -junto con **Antonio Celestino Ferrari, Fausto Gino Tivelli y Jorge Almirón-** de una asociación ilícita fiscal (el primero, como organizador, y los restantes, como miembros), según lo establecido por el artículo 15, inciso "C" de la ley 24.769 -modificada según régimen de la ley 25.874-.

**II.** La defensa de **Aún** presentó un pedido de acogimiento a la amnistía contemplada en la ley 27.743, apoyándose en su regulación y en la del decreto reglamentario



n° 608/2024, así como en la Resolución General n° 5.525/2024 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

De ese modo postuló que la citada ley establecía de un modo taxativo las causales de exclusión a la posibilidad de acogimiento a la misma.

Refirió que la situación de su defendido no se encontraba incluida en ninguna de aquellas causales objetivas y/o subjetivas claramente establecidas por el artículo 4 de la norma, ya que no existía declaración de quiebra o condena confirmada en segunda instancia por los delitos alcanzados en el título IX de la Ley N° 27.430 (delitos tributarios) que impidiera estar amparado por dicho régimen.

Sostuvo además que, el acto de gobierno que integraba la amnistía que amparaba la Constitución Nacional, se encontraba en el caso comprendido y perfeccionado por la norma reglamentaria de la Ley dictada por el Poder Ejecutivo en el marco de su atribución constitucional expresamente conferida.

Citó el Decreto Reglamentario n° 608/2024 con expresa referencia a lo allí dispuesto en su artículo 1° que rezaba: *"extinción de la acción penal - en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación - respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8,9,10, 11 y 15 inc. c-) del Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificatorias..."*; e indicó que resultaba aplicable al presente caso.

Agregó que su asistido Marcelo Oscar Aún no revestía, conforme a la legislación que regulaba los tributos, la objetiva condición de sujeto pasivo de las supuestas obligaciones tributarias adeudadas, toda vez que incluso en el caso de ser responsable por deuda ajena, resultaba que las firmas



que conforme a la plataforma fáctica del juicio, habían sido consideradas usuarias beneficiarias, y en consecuencia, generadoras de las obligaciones tributarias (delitos tributarios) cuya comisión se atribuía objetivamente a la asociación supuestamente liderada por su asistido (siendo esto un dato objetivo que constaba en la elevación a juicio) habían regularizado a la fecha la totalidad, o estaban cumpliendo el plan de cuotas adoptado.

En efecto, señaló que las firmas antes referidas estimadas usuarias se habían acogido a los beneficios contemplados por la Ley N° 27.541 y 27.562, Dto. Reg. N° 833/2.020 y 966/2.020, RG de Afip 4850/2.020, 4855/2.020, 4883/2.020 y 4810/2.021 con anterioridad al 31 de marzo del año 2024 como expresamente la actual ley imponía como condición para su aplicación, cuyos planes de pago se encontraban agregados al expediente digital.

Sostuvo que: (...)Además, tal como lo establecía la normativa, los contribuyentes en trato han exteriorizado y declarado como ajustes impositivos en dichos planes de pago (amnistía fiscal) los créditos fiscales (CF) provenientes de las supuestas facturas apócrifas de las firmas consideradas usinas ( TIVELLI Y MEIER SRL, ACUÑAVI CONSTRUCCIONES SRL Y SEGUFER SRL), rectificando además sus DD.JJ. con expreso reconocimiento de la deuda, incluyendo conforme a la ley vigente en ese momento el allanamiento sin condicionamientos a la pretensión fiscal, que en todos los casos, fue determinada y convalidada por la AFIP en la causa como obligaciones tributarias adeudadas tanto en el Impuesto al Valor agregado, como así también en el Impuesto a las Ganancias y las Salidas no Documentadas por el período de autos (2.011 a 2.020), más aún en el oficio - DEO 6676165 - OFICO COMUNICACIÓN 60000000941 AFIP - DGI, Dirección Regional Mercedes remitido al Juzgado



*Federal de Primera Instancia de Campana, Secretaría Penal N° 3, e incorporado al sistema informático LEX 100, que contiene el informe de las tareas ordenadas por el Instructor en la presente causa, de fecha 03/08/2.022, elaborado por el Sr. Jefe de Revisión y Recursos de la AFIP - DG,I Región Mercedes, Cdor. Carlos Marcelo Porcar , y signado por el Sr. Jefe (Int.) de la División Jurídica de la AFIP - DGI, Región Mercedes, en el Punto B - AJUSTES PROPUESTOS, en forma clara y expresa el Ente Recaudador manifiesta "...En atención a los hechos constatados y de las consideraciones expuestas los ajustes practicados obedecen, principalmente, al desconocimiento de las operaciones que las firmas consideradas USUARIAS habían declarado con los proveedores sindicados como USINAS, motivando la impugnación de la facturación emitida por estas últimas y su incidencia en el Impuesto al Valor Agregado, a las Ganancias y a las Salidas no documentadas (...)"*.

Así, refirió que advertía que habían ingresado dichos saldos de impuestos en los referidos planes de facilidades de pago -según Ley N° 27.541 y 27.542-, y que, al no existir deuda exigible alguna por impuestos para con el fisco en el presente proceso, y siendo que implicaría una contrariedad con el ordenamiento jurídico -para el caso que los planes de pago estuvieran regularmente cumplidos o en cumplimiento-, exigir un nuevo pago por las mismas obligaciones fiscales (delitos tributarios), originaría un pago a favor del Ente Recaudador indebido o incausado, toda vez que se trataba del mismo hecho imponible (mismos impuestos, montos y períodos fiscales).

Dijo que era clara la plataforma fáctica del juicio en cuanto atribuía a su asistido la organización de la asociación ilícita fiscal y también, los ilícitos fiscales que se le atribuía a dicho grupo de empresas.



Agregó que su presentación implicaba el allanamiento y renuncia a toda eventual acción contra la AFIP - DGI derivada de este proceso, señalando que además conforme a Ley, las obligaciones fiscales (delitos fiscales) imputadas a la asociación cuya conducción se atribuía a su defendido, se encontraban amnistiadas, y la redacción de la actual Ley, expresamente incluía a su asistido entre ellos, en la medida que dichas obligaciones se encontrasen cumplidas o en cumplimiento regular, refiriéndose precisamente a las obligaciones impuestas al admitir aquella amnistía.

También dijo que, dado que la Ley expresamente establecía un límite temporal para el acogimiento, se entendía que aquella presentación era la que marcaba el plazo de ingreso al mentado Régimen de Regularización Excepcional de la Obligaciones Tributarias (Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes).

En virtud de ello, solicitó que se requiriera al órgano recaudador que informara:

*"a) La situación en la que se encuentran los planes de pago y acogimiento confeccionados bajo las Ley N° 27.541 y 27.542, de las empresas catalogadas de usuarias de la presente organización a saber:*

*Vicbor SRL, Miding SRL, Martín Pablo Gándara, Gándara SA, M&LG SRL, Industrias Versato SA, Industrias GYD SA, Lady Stork SA, Enzo Store SA, ATK SA, Outmall SA, Tecnotenis SRL y Shoes in Time SRL , apuntando : número de plan, cantidad de cuotas incluidas , impuestos incluidos, montos incluidos, períodos englobados, ; indicando si los mismos se encuentran vigentes en la actualidad, y de ser así, indique si los mismos se encuentran cancelados en su totalidad, o existen cuotas pendientes de pago no exigibles a la fecha, indicando cantidad y monto restante por cada uno de los planes de*



pago; todo lo manifestado por cada una de las empresas señaladas, acompañando además copia de los mismos obtenida a través del Portal de AFIP - DGI- Servicios Interactivos - Mis facilidades - Presentaciones Enviadas-.

b) Para que Informe si los ajustes practicados por los contribuyentes señalados en el punto a-), e incluidos en los referidos planes de pago (amnistía fiscal), se corresponden con lo determinado de oficio por la Administración como deuda de impuestos provenientes de los créditos fiscales impugnados por el Fisco respecto de las supuestas facturas apócrifas de las firmas señaladas como usinas de la presente organización, (TIVELLI Y MEIER SRL, ACUÑAVI CONSTRUCCIONES SRL Y SEGUFER SRL), en los períodos fiscales rotulados en la presente causa-.

Asimismo se oficie al Juzgado Federal de Campana del Registro de la Secretaría Penal N° 3 para que acompañe el IF -2022- 01332530- AFIP - DVRRMR # SDGOPII del 03/08/2.022, elaborado por el Sr. Jefe de la División Revisión y Recursos de la AFIP - DGI Mercedes, el dispositivo DVD que no ha sido incorporado al sistema informático atento la imposibilidad fáctica de su tamaño -29MB- , en el cuál se encuentra UN (1) Anexo por cada contribuyente ( usuarias ), de las acciones efectuadas por el Organismo Recaudador, de las distintas Determinaciones de Oficio.- ( Art. N° 18 LPT).-

Motiva lo solicitado en los puntos anteriores, la necesidad de establecer si en el caso de autos, han sido cumplidas la totalidad de las obligaciones fiscales, correspondientes a las impugnaciones de las facturas apócrifas de las supuestas usinas, a fin de determinar si se aplica al presente caso el instituto de la extinción o la suspensión de la acción penal conforme lo establece el Art. 5 de la Ley N° 27.743.-



*En punto a ello, solicito también se practiquen las medidas que VV.EE. estime adecuadas a fin de verificar la ausencia de causales de exclusión de mi defendido, a tal fin solicito se oficie al Registro de Juicios Universales, para que informe si el Sr. Marcelo Oscar Aùn, DNI N° 17.409.911, CUIT N° 20-17409911-2, con domicilio legal en la calle 9 de Julio N° 460, de la ciudad de Zárate, C.P. (2.800) , Pcia. de Buenos Aires se encuentra en el estado de sujeto fallido (declarado en quiebra- Ley N° 24.522-)”.*

Finalmente, hizo reserva del caso federal -ver presentación incorporada a fs. 1-.

**III.** A partir de esa presentación, se pidió a la Dirección Regional Mercedes de la AFIP que informara si todas las obligaciones tributarias vinculadas a los hechos sometidos a la jurisdicción de este tribunal habían sido acogidas a planes de pago, y, en tal caso, el estado actual de su cancelación, así como si subsistía alguna exigible al contribuyente que correspondiera.

Se aclaró que, en todos los casos, se debía hacer saber con qué tipo de impuestos y con qué período tenía que ver cada plan.

También se solicitó que debían informar si los ajustes practicados respecto de cada contribuyente correspondían con lo determinado de oficio por el organismo recaudador como deuda de impuestos provenientes de los créditos fiscales impugnados por esa agencia respecto de las facturas consideradas apócrifas de las sociedades señaladas como usinas (Su Organización de Servicios SRL, Tivelli y Meier SRL, Acuña Construcciones SRL y Segufer SRL), en los períodos fiscales por los que se había requerido elevación a juicio en este proceso.



También se requirió a los titulares del Registro de Juicios Universales del Poder Judicial de la Nación y de su par de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que informaran si los imputados registraban alguna declaración de quiebra, respecto de la cual no se hubiera dispuesto la continuidad de la explotación y, para el caso, si persistían los efectos de esa declaración.

**IV.** Así, a fs. 8/12 se encuentra agregada la respuesta proporcionada por la Sección Penal Tributario de la Dirección Regional Mercedes -ex AFIP- ocasión en la que se expidió respecto de la situación puntual de los alcances de la Ley 27.743, en los términos solicitados por la defensa técnica de Marcelo Oscar Aún.

Luego de efectuar un análisis acerca de los antecedentes de la presente causa y la normativa que la defensa pretendía aplicar al caso, sostuvo que debía efectuarse el examen puntual de cada uno de los usuarios que se habían beneficiado con el cómputo de las facturas apócrifas proveídas por la asociación ilícita aquí investigada.

Postuló que los contribuyentes que habían actuado en calidad de usuarios fueron Outmall SA; M & LG SRL; Vicbor SRL; Miding SRL; Martín Pablo Gándara; Gándara SA; Industrias Versato SA; Industrias G&D SA; Lady Stork SA; ATK SA y Enzo Store SA.

Refirió que no podía dejar de mencionarse que los contribuyentes citados se encontraban inscriptos fuera de la órbita de la competencia de la Dirección Regional Mercedes, por ende, a fin de responder adecuadamente lo planteado, debía solicitarse la información con relación a cada contribuyente en la dependencia donde se encontraban inscriptas respectivamente.



En punto a ello, indicó que debía gestionar un expediente electrónico (GDE) a cada una de ellas a fin de que informen, el detalle exacto del impuesto, período, monto y plan al que hubiere ingresado, además de indicar si se habían acogido a la Ley 27.743.

Agregó que la única herramienta prevista en la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes como modo de conclusión del proceso, era que todos los usuarios hubieran cancelado el total de los ajustes derivados del cómputo de las facturas apócrifas y su posterior impugnación por el Ente Recaudador.

Además, presentó un escrito dejando constancia de que se había solicitado la información en cuestión al organismo correspondiente.

A su vez, a fs. 13 se encuentra agregada la respuesta del Registro de Juicios Universales del Archivo General del Poder Judicial de la Nación, ocasión en la que informó lo siguiente: "*(...)NO - figuran denunciados como iniciados pedidos de quiebra, concurso preventivo ni quiebra decretada, desde la vigencia del aludido Decreto hasta el día de la fecha a nombre de: "MARCELO OSCAR AUN DNI N° 17.409.911" ; "ANTONIO CELESTINO FERRARI DNI N° 4.358.246" "JORGE ALMIRON DNI N° 11.503.684" ; "DARIO VILLALBA BRIZUELA DNI N° 92.441.854" ; "FEDERICO GERAN MEIER DNI N° 8.685.531" y de "FAUSTO GINO TIVELLI DNI N° 22.436.103".*

Al mismo tiempo se reiteraron los pedidos cursados al ente recaudador, a la oficina de Juicios Universales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la IGJ.

Así, la IGJ respondió mediante oficio electrónico adjuntando el listado de trámites registrados y copia en formato "PDF" del contrato constitutivo y ultima designación de



directorio de la sociedad "CONANGUS S.R.L.", destacándose que: "(...) se registró la quiebra e inhabilitación de la fallida, y la de su órgano de administración Sra. SANCHEZ, Karen Belén DNI 40.188.803 y GALARZA, Verónica Alejandra DNI 16.217.881 bajo el N° 145 F°455 del L°14 de Fallidos, de la sociedad "CONANGUS S.R.L."

V. Por su parte, a fs. 8/10 la defensa técnica de **Darío Villalba Brizuela**, a cargo del doctor Cristian Daniel Pérez, realizó una presentación por medio de la cual formuló su adherencia al planteo de amnistía y extinción de la acción penal en trámite hecho por la defensa técnica de **Aún**.

Sostuvo que su asistido no era sujeto pasivo de las obligaciones tributarias que habían originado la presente causa penal, toda vez que las empresas usuarias de los servicios prestados por la asociación a la que pertenecía **Brizuela** habían regularizado completamente sus deudas fiscales.

Refirió que dichas empresas se habían acogido a los planes de pago previstos por leyes anteriores a la Ley N° 27.743 y, por ende, cumplido con las condiciones exigidas por la amnistía fiscal dispuesta por la norma en cuestión.

Señaló que era relevante destacar que las empresas que habían sido catalogadas como usuarias habían cumplido con sus obligaciones fiscales mediante la adhesión a planes de pago vigentes, incluidos aquellos créditos fiscales que derivaron de facturas impugnadas en su momento.

En consecuencia, postuló que no existía deuda exigible alguna por parte de estas empresas en relación con las obligaciones fiscales que habían sido objeto de la investigación en esta causa.

En consecuencia, sostuvo que no resultaba procedente que se exigiera a **Brizuela** un nuevo pago por las mismas obligaciones fiscales que ya habían sido regularizadas, lo



que evitaría incurrir en un pago indebido a favor del ente recaudador.

Concluyó no cabía duda alguna de que **Brizuela** se encontraba plenamente incluido en el régimen de amnistía dispuesto por la Ley N° 27.743, ya que no se hallaba incurso en ninguna de las causales de exclusión previstas por la normativa vigente.

Finalmente, formuló reserva del caso federal.

**VI.** Asimismo, el doctor Luis Fernando Charró, a cargo de la defensa técnica de **Aún**, presentó un escrito a través del cual efectuó algunas consideraciones respecto de la usina Su Organización de Servicios SRL y requirió que se considerase cumplida en su oportunidad su obligación fiscal, a partir de las piezas objetivas a las que hizo referencia, en virtud de que aquellas obligaciones fiscales se encontraban regularizadas con antelación a la vigencia de la amnistía y como tales, puntualizó que estaban expresamente alcanzadas por la ley (arts. 3, inc. "E" y 5, 3° párrafo).

A su vez, se agregó al expediente digital el informe realizado por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes y se corrió traslado al doctor Gustavo Javier Andorno Révora -parte querellante- a fin de que se expida sobre la procedencia de la extinción de la acción penal en los términos de la ley 27.743.

**VII.** Que a fs. 10/18 se incorporó el escrito presentado por el doctor Gustavo Javier Andorno Révora.

Postuló que, para obtener el beneficio de extinción de la acción penal, a la luz de la Ley 27.743 -y su decreto reglamentario 608/2024-, se debía acreditar que la deuda regularizada, cancelada o extinguida satisficiera el perjuicio fiscal causado por el delito tributario (en ese caso la asociación ilícita y los usuarios de las facturas apócrifas).



En punto a ello, se señaló que era necesario requerir la información en el Organismo que representaba a efectos de contar con precisión información vinculada al estado de la deuda.

Así, adjuntó el informe n° IF-2024 03083873-AFIPSE-TDVJUMR#SDGOPII, obteniendo el cuadro de situación, para describir las distintas situaciones frente a la deuda tributaria, lo que fue señalando para cada uno de los contribuyentes con relación a lo acontecido respecto a los ajustes sufridos producto de la maniobra aquí investigada:

**"(...) 1) OUTMALL S.A. CUIT N° 30-71643644-2-**

*Producto del informe del Art. 18 LPT ordenado en autos se realizó la verificación y determinación de deuda para este y los siguientes contribuyentes que se indican. En tal sentido, bajo la Orden de Intervención N° 1892.851, se determinó ajuste en el **Impuesto al Valor Agregado** del período fiscal **2019** (10/2019 a 12/2019) por **\$332.233,77** que fuera incorporado en el plan de facilidades de pago Nro. O 245131 (de 1 cuota) conforme el régimen previsto en la Ley 27.562; el cual a la fecha se encuentran cancelado, siendo la última cuota abonada el 25/11/2020.*

*Respecto del período fiscal **2020** (01/2020 a 09/2020) por **\$2.469.270,47**, se incorporó en el plan de facilidades de pago Nro. O 245131 (1 cuota) conforme el régimen previsto en la Ley 27.562, el cual a la fecha se encuentra cancelado; siendo la última cuota abonada el 25/11/2020 y con tres (3) pagos bancarios de fecha 27/11/2020, 10/12/2020 y 14/12/2020.*

*Con respecto al **Impuesto a las Ganancias** el período fiscal **2019** por **\$1.532.374,50**, fue incluido en el plan de facilidades de pago Nro. O 324550 (12 cuotas) conforme el régi-*



men previsto en la Ley 27.562, el cual a la fecha se encuentra cancelado; siendo la última cuota abonada el 25/11/2020.

2) **ML&G S.R.L. CUIT N° 30-71058813-5 -**

A dicho contribuyente bajo la Orden de Intervención N° 1.892.849 se le realizó ajuste en el **Impuesto al Valor Agregado** del período **2015** (08/2015 a 12/2015) por la suma de **\$1.226.368,08** que fuera incluida junto con los intereses en el plan de facilidades de pago Nros. 0265826, conforme el régimen previsto en la Ley 27.562; el cual a la fecha se encuentra **vigente, habiéndose cancelado 46 de las 121 cuotas pactadas.**

El período **2016** (01/2016 a 12/2016) en la suma de **\$2.831.323,11** fue incluida en el plan de facilidades de pago Nro. 0265826 conforme el régimen previsto en la Ley 27.562; el cual a la fecha se encuentra **vigente, habiéndose cancelado 46 de las 121 cuotas pactadas.**

Respecto al período **2017** (01/2017 a 12/2017) por **\$ 2.209.059** la deuda fue incluida en el plan de facilidades de pago Nro. O 270123, conforme el régimen previsto en la Ley 27.562; el cual a la fecha se encuentra **vigente, habiéndose cancelado 46 de las 121 cuotas pactadas.**

El período **2018** (01/2018 a 12/2018) por **\$1.982.658,91** fue incorporado en el plan de facilidades de pago Nros. 0270123 conforme el régimen previsto en la Ley 27.562, se encuentra vigente, habiéndose abonado **46 de las 121 cuotas pactadas** y plan Q 851428 del RG 4268, el que a la fecha se encuentra **cancelado** (última cuota abonada el 16/05/2023).

El período **2019** (01/2019 a 12/2019) por **\$2.733.307,93** fue incluida en el plan de facilidades de pago Nro. 0270123, conforme el régimen previsto en la Ley 27.562;



el cual a la fecha se encuentra **vigente, habiéndose cancelado 46 de las 121 cuotas pactadas.**

El período **2020** (01/2020 a 09/2020) por **\$1.152.060** fue incluido en el plan de facilidades de pago Nro. 0 322668, conforme la RG 4268, el cual se encuentra **cancelado** (última cuota abonada el 16/07/2021).

Respecto al **Impuesto a las Ganancias** del período **2015** por **\$5.550.256,25**; período **2016** por **\$4.603.528,63**; período **2017** por **\$4.302.382,05**; período **2018** por **\$2.291.821,72** y período **2019** por **\$3.904.725,63**: las deudas correspondientes a este impuesto en todos los períodos mencionados precedentemente fueron incluidas en el plan de facilidades de pago Nro. 0270123, conforme el régimen previsto en la **Ley 27.562**; **el cual a la fecha se encuentra vigente, habiéndose cancelado 46 de las 121 cuotas pactadas.**

**3) LADY STORK S.A. CUIT N° 30-69878303-2 -**

Bajo la Orden de Intervención N° 1.892.852 se le practico ajuste en el **Impuesto al Valor Agregado** del período **2017** (05/2017) por **\$3.273.617,13** y período **2020** (01/2020) por **\$5.963.935,33**, siendo la deuda por estos conceptos incluida en el plan de facilidades de pago Nro. 0281268, conforme el régimen previsto en la **Ley 27.562**; el cual fue **cancelado** en una cuota el 27/11/2020.

Con relación al **Impuesto a las Ganancias** del período **2017** por **\$3.659.468,90** fue incluida en el plan de facilidades de pago Nro. 0281268, conforme el régimen previsto en la **Ley 27.562**; el cual fue **cancelado** en una cuota el 27/11/2020.

El período **2018** por **\$6.384.222,19** fue incorporado al plan de facilidades de pago Nro. 0281268, conforme el régimen previsto en la **Ley 27.562**; el cual fue **cancelado en una cuota el 27/11/2020**; cabiendo aclarar, que dicho importe fue



imputado al impuesto a las ganancias del período 2019 que no formó parte del ajuste.

En canto al **Impuesto Salidas no Documentadas** del período **2018** del total ajustado de **\$2.366.379,47**, la suma de **\$818.310,13** fue incorporada en el plan de facilidades de pago Nro. 0281268 (conforme el régimen previsto en la **Ley 27.562**, el cual fue **cancelado en una cuota** el 27/11/2020) y la suma de **\$1.548.069,34** en el plan de facilidades de pago Nro. P910421 (conforme el régimen previsto en la **Ley 27.653**, el cual fue cancelado en una cuota el 14/03/2022).

El período **2019** de **\$3.692.911,53** fue incluida en el plan de facilidades de pago Nro. 0281268, conforme el régimen previsto en la **Ley 27.562**; el cual fue **cancelado en una cuota** el 27/11/2020.

**4) ENZO STORE S.A. CUIT 30-71641571-2 -**

Respecto a la Orden de Intervención N° 1.892.850 con relación al **Impuesto al Valor Agregado** del período **2020** por **\$360.004,70** fue **cancelado** mediante depósito el 26/11/2020.

En el **Impuesto a las Ganancias** del período **2020** del total ajustado, esto es **\$2.611.929**, la suma de **\$1.111.929 se canceló en efectivo** el 27/11/2020 y, el resto, **\$ 1.500.000**, fue incorporado en el plan de facilidades de pago Nro. Q 257902, conforme el régimen previsto en la **Ley 27.653**, el que se encuentra **cancelado** (última cuota abonada el 16/04/2023).

Con el **Impuesto Salidas no Documentadas** del período **2020** por **\$1.862.647,50** fue incorporado en el plan de facilidades de pago Nro. Q822294, conforme el régimen previsto en la RG 4268, el cual fue **cancelado en su totalidad el 16/06/2024**.

**5) VICBOR S.R.L. CUIT N° 30-70933260-7 -**



A raíz de la generación de la Orden de Intervención N° 1.892.845 en el Impuesto al Valor Agregado del período 2015 (07/2014 a 06/2015) por \$2.693.499,90 fue incorporada en los planes de facilidades de pago Nro. Q267693 Ley 27562, refinanciado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545704 Ley 27.743 de 3 cuotas, el cual se encuentra vigente, no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1ª vence el 16/10/2024; plan Nro. O507501 Ley 27.562, refinanciado el 16/08/2024 en el plan T522966 Ley 27.743 de 3 cuotas y plan Nro. P718470 Ley 27.563, el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada 16/09/2023).

El período 2016 (07/2015 a 06/2016) por \$8.066.334,45 fue incorporado a los planes de facilidades de pago Nro. Q267693, refinanciado el 16/08/2024 en el plan T545704 Ley 27.743 de 3 cuotas, el cual se encuentra vigente (no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1ª vence el 16/10/2024); Nro. Q342240 Ley 27.562, refinanciado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545693 Ley 27.743 de 3 cuotas que se encuentra vigente (no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1ª vence el 16/10/2024) y plan Nro. P718470 Ley 27.563, el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada 16/09/2023).

El período 2017 (07/2016 a 06/2017) por \$9.911.781,03 fue incorporada al plan Nro. Q267693, refinanciado el 16/08/2024 en el plan T545704 Ley 27.743 de 3 cuotas, el cual se encuentra vigente; plan Nro. Q342240 Ley 27.562, refinanciado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545693 Ley 27.743 de 3 cuotas, el cual se encuentra vigente y plan Nro. P718470 Ley 27.563, el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada 16/09/2023) y plan Nro. T541783 Ley 27.743 cancelado el 11/09/2024.



El período 2018 (07/2017 a 06/2018) por \$7.934.902,47 incorporada al plan Nro. Q267693, refinanciado el 16/08/2024 en el plan T545704 Ley 27.743 de 3 cuotas, el que se encuentra vigente; plan Nro. Q342240 Ley 27.562, refinanciado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545693 Ley 27.743 de 3 cuotas, que está vigente; plan Nro. P718470 Ley 27.563, el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada 16/09/2023) y plan Nro. T541783 Ley 27.743 cancelado el 11/09/2024.

El período fiscal 2019 (07/2018 a 06/2019) por \$43.550.893,03 fue incorporado a los planes de facilidades de pago Nro. Q267693, refinanciado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545704 Ley 27.743 de 3 cuotas, el cual se encuentra vigente; plan Nro. Q342240 Ley 27.562, refinanciado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545693 Ley 27.743 de 3 cuotas, que está vigente y plan Nro. P718470 Ley 27.563, el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada 16/09/2023).

El período 2020 (07/2019 a 06/2020) por \$75.181.280,10 fue incorporado a los planes de facilidades de pago Nro. Q267693, refinanciado el 16/08/2024 en el plan T545704 Ley 27.743 de 3 cuotas; plan Nro. Q342240 Ley 27.562, refinanciado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545693 Ley 27.743 de 3 cuotas y plan Nro. 0308016 Ley 27.562 refinanciado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545702 Ley 27.743 en 3 cuotas; todos los cuales se encuentran vigentes (no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1era. cuota vence el 16/10/2024) y en el plan Nro. P718470 Ley 27.563, el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada 16/09/2023) y plan Nro. T561781 Ley 27.743 cancelado el 13/09/2024.

El período 2021 (07/2020 a 09/2020) por \$30.740.050,79 fue incorporado al plan de facilidades de pago Nro. Q 566337 (RG 4268) y en el plan de facilidades de pago



Nro. P718470 Ley 27.562; ambos cancelados con fecha 16/09/2021 y 16/09/2023, respectivamente.

Con relación al Impuesto a las Ganancias del período 2015 por \$4.111.071,80; período 2016 por \$13.410.775,04 y período 2018 por \$20.111.856,91 fue incluida en el plan de facilidades de pago Nro. 0390234 Ley 27.562, reformulado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545676 Ley 27.743 de 3 cuotas, que se encuentra vigente; plan Nro. Q250742 Ley 27.653, el cual fue reformulado el 16/08/2024 en el plan Nro. T522950 de 3 cuotas, el cual se encuentra vigente y plan Nro. P718470 Ley 27.562 el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada el 16/09/2023).

El período 2017 por \$20.154.861,87 y 2019 por \$37.183.160,62 fue incluida en el plan de facilidades de pago 0390234 Ley 27.562, reformulado el 16/08/2024 en el plan Nro. T545676 Ley 27.743 de 3 cuotas, que se encuentra vigente; en el plan Nro. Q250742 Ley 27.653, el cual fue reformulado el 16/08/2024 en el plan Nro. T 522950 de 3 cuotas, el cual se encuentra vigente; en el plan Nro. P718470 Ley 27.562 el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada el 16/09/2023) y en el plan Nro. T541783 Ley 27.743 cancelado en 1 cuota el 11/09/2024.

Y en el Impuesto a las Salidas no Documentadas del período 2015 (12/2014 a 06/2015) por \$4.066.523,72; período 2016 (07/2015 a 06/2016) por \$16.946.831,54; período 2017 (07/2016 a 06/2017) por \$23.596.042,01; período 2018 (07/2017 a 06/2018) por \$7.874.816,35; período 2019 (07/2018 a 06/2019) por \$18.098.138,21 y período 2020 (07/2019 a 06/2020) por \$28.931.300,76 fue incorporada el 11/09/2024 al plan de pago Nro. T541783 Ley 27.743 cancelado en 1 cuota el 11/09/2024. Al respecto, cabe aclarar que en los planes de la Ley 27.743, Nros. T541783 (cancelado el 11/09/2024) y T561781



(cancelado el 13/09/2024), fue incluida la deuda determinada de oficio que, oportunamente, fuera apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, habiendo informado con fecha 8/10/2024 la representante del Fisco que tiene a cargo los expedientes donde tramitan los respectivos recursos, que la contribuyente presentó por presentación digital los respectivos F.408 de desistimiento y allanamiento a la pretensión fiscal (conf. lo previsto en el art. 3 de la Ley 27.743 y art. 35 de la RG 5525/2024 AFIP).

**6) ATK S.A. CUIT N° 30-71641597-6 -**

En la OI N° 1.892.844 del Impuesto al Valor Agregado del período 2020 (07/2019 a 02/2020) por \$12.226.829,90 la deuda se incorporó en dos planes de pago Nros. Q256339 y 0264961 Ley 27.562 que fueron reformulados en los Nros. T323078 y T323081 ambos conforme el régimen previsto en la Ley 27.743, cancelados en un pago el 13/08/2024.

El Impuesto a las Ganancias del período 2020 de \$1.098.473,63 la deuda se canceló en un pago el 21/12/2020

Y el Impuesto a las Salidas no Documentadas del período 07/2019 a 02/2020 de \$3.897.412,75 la deuda se incorporó en el plan de pago Nro. Q821727, conforme RG 4268, en el que se cancelaron las 24 cuotas pactadas, (última cuota abonada el 16/09/2024).

**7) INDUSTRIAS G&D S.A. CUIT N° 30-71530010-5 -**

Con relación a la OI N° 1.892.854 el Impuesto al Valor Agregado del período 2017 (08/2016 a 07/2017) del total de \$2.377.277,8, la suma de \$1.624.583,14 se incorporó en el plan de pago Nro. 0269990 y Nro. 0265682 (ambos conf. régimen de la Ley 27.562), los cuales fueron refinanciados en los planes Nro. T523037 y Nro. T523022, conf. régimen de la Ley 27.743 en 3 cuotas, los cuales se encuentran vigentes (no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1era.



cuota vence el 16/10/2024); mientras que la suma de \$752.694,71, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2018 (08/2017 a 07/2018) del total de \$6.109.059,13, la suma de \$5.489.298,93 fue incorporada al plan de facilidades de pago Nro. 0310044 Ley 27.562, que fue reformulado en el plan de pago Nro. T523005 el 16/08/2024 conforme el régimen previsto en Ley 27.743 de 3 cuotas, el cual se encuentra vigente (no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1era. cuota vence el 16/10/2024); mientras que la suma de \$319.760,20, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2019 (08/2018 a 07/2019) del total de \$15.824.832,43, la suma de \$13.108.233,56 fue incorporada a los planes de facilidades de pago Nros. 0269990, 0265682 y 0310044, reformulados en los planes de pago Nros. T 523037, T523022 y T523005 según Ley 27.743, todos de 3 cuotas, los cuales se encuentran vigentes; mientras que la suma de \$2.716.598,85 que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2020 (08/2019 a 07/2020) del total de \$32.364.899,41, la suma de \$31.004.541,48 fueron incorporados en los planes de facilidades de pago Nros. 0269990, 0265682 y 0260788 (todos de la Ley 27.562), los que con fecha 16/08/2024 fueron reformulados según Ley 27.743 en los planes de pago Nros. T523037, T 523022 y T 522991 de 3 cuotas, los cuales se encuentran vigentes; mientras que la suma de \$1.360.357,93 que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

Luego el Impuesto a las Ganancias del período 2017 del total de \$8.983.674,2, la suma de \$6.532.542,17 fue in-



corporada en el plan de pago Nro. 0398895 Ley 27.562 que fue reformulado el 16/08/2024 en el plan Nro. T522996 de 3 cuotas Ley 27.743, que se encuentra vigente (no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1era. cuota vence el 16/10/2024); mientras que la suma de \$2.451.132,03 que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2018 del total de \$5.158.346,36, la suma de \$2.299.427,90 fue incorporada en el plan de pago Nro. Q256526, el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada el 16/04/2024) y el plan de pago Nro. P663960 el que también está cancelado (ultima cuota abonada el 18/01/2022); mientras que la suma de \$2.858.918,46, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2019 del total de \$25.334.206,16, la suma de \$20.721.366,56 se incorporó en los planes de pago Nro. 0398895 (el cual fue reformulado el 16/08/2024 en el plan T522996 conf. el régimen previsto en la Ley 27.743 de 3 cuotas, el que se encuentra vigente); plan de pago Nro. Q253061 (el cual se encuentra cancelado, habiéndose pagado la última cuota el 16/04/2024) y plan de pago Nro. P663960 (el cual se encuentra cancelado, habiéndose pagado la última cuota el 18/01/2022); mientras que la suma de \$4.612.839,60, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

Además, en el Impuesto a las Salidas no Documentadas del período 2017 (08/2016 a 07/2017) por \$8.745.204,36; período 2018 (08/2017 a 07/2018) por \$6.473.861,62; período 2019 (08/2018 a 07/2019) por \$4.849.571,98; período 2020 (08/2019 a 07/2020) por \$77.123.342 y período 2021 (08/2020 a 09/2020) por \$46.257.482,30 esta deuda que fuera determinada



de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

**8) INDUSTRIAS VERSATO S.A. CUIT N° 30-71550173-9 -**

Mediante la OI N° 1.892.853 del Impuesto al Valor Agregado por el período 2017 (09/2017 a 12/2017) por \$393.476,75, que fuera determinada de oficio y se encuentra apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2018 (01/2018 a 12/2018) de la suma total de \$5.932.633,08; la suma de \$3.270.080,75 fue incluida en los planes de facilidades de pago Nros. 0268323 y 0312979 (ambos Ley 27.562), los cuales fueron reformulados el 16/08/2024 en los planes de pago Nros. T522987 y T522983 Ley 27.743 de 3 cuotas, los cuales se encuentran vigentes; mientras que la suma de \$2.662.552,30, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2019 (01/2019 a 12/2019) de la suma total de \$53.164.592,33, la suma de \$47.686.026,76 fue incorporada en los planes de facilidades de pago Nros. 0268323 y 0312979 (ambos Ley 27.562), los cuales fueron reformulados el 16/08/2024 en los planes de pago Nros. T522987 y T522983 Ley 27.743 de 3 cuotas, que se encuentran vigentes (no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1era. cuota vence el 16/10/2024); mientras que la suma de \$5.478.565,57, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2020 (01/2020 a 09/2020) de la suma total de \$36.783.825,33, la suma de \$31.614.986,63 fue incluida en el plan de pago Nro. 0263894 Ley 27.562 (el cual fue reformulado el 16/08/2024 en el plan de pago T522977 de 3 cuotas Ley 27.743, que se encuentra vigente) y en el plan de



pago Nro. 0485954 Ley 27.562 (el cual se encuentra a la fecha cancelado, habiéndose abonado la última cuota el 16/08/2021); mientras que la suma de \$5.168.838,70, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

En el Impuesto a las Ganancias el período 2017 de \$1.402.828,42, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2018 de \$16.680.501,82, la suma de \$13.540.481,36 fue incorporada en planes de facilidades de pago conforme al régimen previsto en la Ley 27.562, Nro. 0342417 (fue reformulado el 16/08/2024 en el plan de la Ley 27.743 Nro. T522979 de 3 cuotas, que se encuentra vigente (no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1era. cuota vence el 16/10/2024); Nro. P664812 (cancelado, última cuota abonada el 16/03/2023) y Nro. Q257925 (cancelado, última cuota abonada el 16/04/2024); mientras que la suma de \$3.140.020,46, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

El período 2019 de \$60.176.147,32, la suma de \$40.259.430,09 fue incorporada al plan de pago Nro. 0342417 (fue reformulado el 16/08/2024 en el plan de la Ley 27.743 Nro. T5229679 de 3 cuotas, el que está vigente, al plan de pago Nro. P664812 (cancelado, última cuota abonada el 16/03/2023) y al plan de pago Nro. Q255151 (cancelado, última cuota abonada el 16/04/2024); mientras que la suma \$19.916.717,23, que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

Luego el Impuesto a las Salidas no Documentadas del período 2017 (09/2017 a 12/2017) por \$793.511,44; período 2018 (01/2018 a 12/2018) por \$5.407.386,36; período 2019 (01/2019 a 12/2019) por \$23.789.568 y período 2020 (01/2020 a



09/2020) por \$72.029.825 esta deuda que fuera determinada de oficio y apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentra impaga.

**9) MIDING S.R.L. CUIT N° 30-70856559-4 -**

Bajo la OI N° 1.892.847 se ajusto el Impuesto al Valor Agregado del período 2018 (09/2017 a 08/2018) por \$1.961.661,19 fue incorporada al plan de pago Nro. 0526732 Ley 27.562 reformulado el 9/09/2024 en el plan de pago T522975 Ley 27.743 de 3 cuotas, el cual está vigente (no habiéndose abonado aún ninguna cuota, toda vez que la 1era. cuota vence el 16/10/2024); en el plan Nro. T549852 Ley 27.743 presentado el 12/09/2024 y cancelado en 1 cuota en esa fecha.

El período 2019 (09/2018 a 08/2019) por \$7.477.674,15 fue incorporada al plan de pago Nro. 0526732 de la Ley 27.562, el cual fue reformulado en el plan de pago Nro. T522975 de 3 cuotas, conf. régimen de la Ley 27.743 y en el plan Nro. T549852 Ley 27.743 presentado el 12/09/2024 y cancelado en 1 cuota en esa fecha.

El período 2020 (09/2019 a 08/2020) por \$20.718.512,70 fue incorporado en los planes de pago Nro. 0526732 de la Ley 27.562 (el cual fue reformulado en el plan de pago Nro. T522975 Ley 27.743 de 3 cuotas, el que se encuentra vigente); plan de pago Nro. 0626784 de la RG 4268 (el cual se encuentra cancelado, habiéndose abonado la última cuota el 16/10/2021) y plan de pago Nro. T549852 Ley 27.743 presentado el 12/09/2024 y cancelado en 1 cuota.

Asimismo, según lo informado oportunamente por la Agencia 41 se realizó un pago bancario con fecha 23/12/2020 y dos compensaciones con fecha 19/05/2021.

El período 2021 (09/2020) por \$8.064.853,12 fue cancelada de la siguiente manera, por el plan de pago Nro.



0626784 de la RG 4268 (el cual se encuentra cancelado, habiéndose abonado la última cuota el 16/10/2021), plan de pago Nro. T549852 Ley 27.743 presentado el 12/09/2024 y cancelado en 1 cuota y una compensación efectuada el 21/05/2021 (conf. lo informado oportunamente por la Agencia 41).

Con relación al Impuesto a las Ganancias del período 2015 por \$3.914.201,89 fue incorporada en el plan de pago Nro. 0526732 de la Ley 27.562, el cual fue reformulado el 9/09/2024 en el plan de pago T522975 Ley 27.743 de 3 cuotas, encontrándose vigente.

El período 2016 por \$5.157.657,87 fue incorporada en el plan de pago Nro. 0526732 de la Ley 27.562, el cual fue reformulado el 9/09/2024 en el plan de pago T522975 Ley 27.743 de 3 cuotas, el cual está vigente.

El período 2017 de \$5.390.253,88 fue incorporada en el plan de pago Nro. 0526732 de la Ley 27.562, el cual fue reformulado el 9/09/2024 en el plan de pago T522975 Ley 27.743 de 3 cuotas, el cual está vigente y en el plan T549852 Ley 27.743 presentado el 12/09/2024 y cancelado en 1 cuota.

El período 2018 \$1.734.281,74 fue incorporada en el plan de pago Nro. T549852 Ley 27.743 presentado el 12/09/2024 y cancelado en 1 cuota.

En el Impuesto a las Salidas no Documentadas del período 2015 (07/2015 a 08/2015) \$1.446.517,57; período 2016 (09/2015 a 08/2016) \$5.062.328,25; período 2017 (09/2016 a 08/2017) \$3.829.444,29; período 2018 (09/2017 a 08/2018) de \$10.169.166,41; período 2019 (09/2018 a 08/2019) de \$23.159.688,55; período 2020 (09/2019 a 08/2020) de \$32.455.972,72 y período 2021 (09/2020) \$17.300.190,11 fue incorporada el 11/09/2024 al plan de pago Nro. T549852 Ley 27.743 el cual fue cancelado en esa fecha. Al respecto, cabe aclarar, que en el plan de la Ley 27.743, Nro. T549852 (can-



celado a la fecha) fue incluida la deuda determinada de oficio que, oportunamente, fuera apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, habiendo informado el representante del Fisco con fecha 8/10/2024, que la contribuyente "...hizo la presentación ante el Tribunal Fiscal de su acogimiento a la moratoria". Asimismo, indicó que habiéndose corrido "... traslado al Fisco Nacional por el término de 10 (diez) días del acogimiento a la ley 27.743 informado por la recurrente en sus presentaciones del 18/9/2024...todavía no se realizó la verificación de la documental presentada por la firma a fin de constatar el traslado".

**10) GANDARA MARTIN PABLO CUIT 20-22041437-0 -**

La OI N° 1.639.134 en el Impuesto al Valor Agregado del período 2015 de \$1.043.578,73, el Impuesto a las Ganancias por el período 2015 \$1.391.753,39 y el Impuesto a las Salidas no Documentadas del período 2015 \$734.585,14.

La deuda del contribuyente Martín Gandara por todos los impuestos y períodos mencionados precedentemente fue incorporada a los planes de facilidades de pago Nros. P719296 Ley 27.653 y Nro. 0388594 Ley 27.562, los cuales fueron cancelados el 30/11/2020 y 1/02/2022, respectivamente.

Cabiendo aclarar, que si bien en dichos planes no se visualiza que haya incluido la deuda por el Impuesto a las Salidas no Documentadas del Ejercicio Fiscal 2015, se observa que el importe correspondiente a dicho impuesto fue imputado en ambos planes de pago al Período Fiscal 3/2019, por el cual no se había realizado ningún ajuste, con lo cual estaría cancelado.

**11) GÁNDARA SOCIEDAD ANÓNIMA - CUIT N° 30-65827866-**

**1 -**

La OI N° 1.892.848 por el Impuesto al Valor Agregado del período 2015 \$31.881,64 se incorporó en el plan de



pago Nro. P738857 Ley 27.653, el cual fue cancelado el 4/02/2022 en una cuota.

El período 2016 de \$85.683,66 se incorporó en el plan de pago Nro. P738857 Ley 27.653, el cual fue cancelado el 4/02/2022 en una cuota.

El período 2017 \$452.758,97 fue incluida en el plan de pago Nro. 0424835 Ley 27.562, el cual se encuentra vigente, habiéndose cancelado 47 de las 120 cuotas pactadas, en el plan de pago Nro. 0450054 Ley 27.562, el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada el 16/03/2022) y en el plan de pago Nro. P738857 Ley 27.653, el cual fue cancelado el 4/02/2022 en una cuota.

El período 2018 \$106.586,17 fue incorporada en el plan de pago Nro. 0450054 Ley 27.562, el cual se encuentra cancelado (última cuota abonada el 16/03/2022) y en el plan de pago Nro. P738857 Ley 27.653, el cual fue cancelado el 4/02/2022 en una cuota.

El período 2019 \$20.246,36 se incorporó en el plan de pago Nro. P738857 Ley 27.653, el cual fue cancelado el 4/02/2022 en una cuota.

El período 2020 \$50.068,53 se incorporó en el plan de pago Nro. P738857 Ley 27.653, el cual fue cancelado el 4/02/2022 en una cuota.

Respecto al Impuesto a las Ganancias del período 2015 \$47.659,50 se incorporó en el plan de pago Nro. P738857 Ley 27.653, el cual fue cancelado el 4/02/2022 en una cuota.

El período 2016 \$142.652,79 se incorporó en el plan de pago Nro. P738857 Ley 27.653, el cual fue cancelado el 4/02/2022 en una cuota.

El período 2017 \$720.178,10 fue incluida en el plan de pago Nro. 0424835 Ley 27.562, el cual se encuentra vigente, habiéndose cancelado 46 de las 120 cuotas pactadas.



*Y el Impuesto a las Saldas no Documentadas del período 01/2015 a 12/2015 \$57.668; período 01/2016 a 12/2016 \$172.609,87; período 01/2017 a 12/2017 \$871.415,50 y período 01/2018 a 12/2018 \$132.911,52: se incorporó en el plan de pago Nro. P738856 Ley 27.653, cancelado en una cuota con fecha 04/02/2022.*

*El período 01/2019 a 12/2019 \$19.434,42: se incorporó en los planes de pago Nro. P738857 Ley 27.653 y plan de pago Nro. P738856 Ley 27.653, ambos cancelados en una cuota con fecha 04/02/2022".*

*Así, sostuvo que, en resumen: "(...) a) La deuda de las contribuyentes, Outmall SA; Lady Stork SA; Enzo Store SA; ATK SA, Martín Pablo Gandara y Gandara SA se encuentra cancelada a la fecha. b) Del total de la deuda relativa a las contribuyentes M&G SRL, Vicbor SRL y Miding SRL a la fecha, una parte se encuentra abonada y otra regularizada en planes de facilidades de pagos que aún no se han cancelado, encontrándose vigentes a la fecha. c) Por último la deuda relativa a las contribuyentes Industrias G&D SA e Industrias Versato SA, fue parcialmente cancelada o incorporada en planes de pagos vigentes, quedando un remanente impago a la fecha".*

*Cabe señalar que la información se corresponde con las facturas apócrifas de las usinas provenientes de los créditos fiscales impugnados respecto de las facturas consideradas apócrifas de las sociedades, Su Organización de Servicios SRL, Tivelli y Meier SRL, Acuñaavi Construcciones SRL y Seguffer SRL, en los períodos fiscales por los que se requirió elevación a juicio en este proceso*

*Igualmente no puede dejar de señalarse que la deuda impugnada respecto a las facturas de la firma Shoes In Time S.A., se encuentra apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, siendo dable aclarar que con independencia de lo re-*



suelto en autos respecto a esta contribuyente, las facturas por ella emitidas, solo pueden tener dos destinos, uno si son apócrifas como lo ha sostenido esta Agencia lo resolverá el Tribunal Fiscal, y otro si son validas, entonces generan debito fiscal para Shoes In Time S.A., situación que no se ha contemplado a la hora de analizar si procede o no la extinción de la acción en virtud del Dto. N° 608/24 dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación al reglamentar la Ley 27.743.

*Ergo, lo mencionado constituye otro elemento que debe tenerse en cuenta a la hora de decidir la procedencia o no de la petición efectuada por la defensa”.*

Así, entendió que no estaban dadas las condiciones regladas en el Decreto n° 608/24, dado que consideró que la deuda objeto de la maniobra aquí bajo investigación, a la fecha, no se hallaba totalmente saldada.

Esto, debido a que una parte estaba en planes de pago “comunes” o que no corresponden a la Ley 27.743 (modo de excepción de finalizar la causa para la Asociación Ilícita), Planes Vigentes que no habían terminado de abonarse las cuotas pactadas y otra no se había pagado.

Adicionalmente, señaló que los imputados podrían llegar a reunir los requisitos del Decreto en cuestión, en el supuesto que los usuarios regularicen sus deudas producto del ajuste de las facturas consideradas apócrifas dentro del régimen de la Ley 27.743 y se efectúe una cancelación total de ella.

**VIII.** A su turno, al correrse traslado al Ministerio Público Fiscal, el Auxiliar Fiscal ante este Tribunal, doctor Martín Bonomi, postuló su rechazo frente a la pretensión de las defensas de **Aún** y de **Villalba Brizuela** y además planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 del decreto reglamentario n° 608/2024.



Sostuvo que del análisis de la situación procesal y de la normativa del caso -ley 27.743 y su correspondiente decreto reglamentario- lo llevaba a considerar que aquel artículo 1 no debía ser aplicado a la situación de los solicitantes.

Entendió que, en estas circunstancias, la única vía legal posible para no aplicar una norma era la declaración de su inconstitucionalidad.

Dijo que no podía desconocerse que, según la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde antaño, la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal era un acto de suma gravedad institucional, por lo que se disponía como un mecanismo de aplicación bajo estricta rigurosidad, y frente a normas que se encontraban en clara contradicción con alguna cláusula constitucional (Fallos 226:688; 242:73; 285:369; 300:241, 1087, entre muchos otros).

Que los artículos 1º y 28 de la Constitución Nacional habilitaban el control judicial para examinar si una norma vigente guardaba razonabilidad o si, por el contrario, al carecer de ella, resultaba incompatible con el texto fundamental (Fallos: 343:1704, considerando 8º y sus citas, 347:1434, entre muchos).

Refirió que no se encontraba cuestionada la validez del art. 15.c de la ley 27.430, norma que regulaba el tipo penal de la asociación ilícita tributaria por el que los imputados de autos se encontraban acusados, norma que -además- receptaba la figura análoga de la anterior Ley Penal Tributaria, 24.769 según ley 25.874, que también preveía la conducta en el art. 15.c.

Que, en este caso, resultaba claro que el legislador al dictar la ley 27.743 había establecido la posibilidad



de extinguir la acción penal respecto de quienes se encontraran imputados por algunos delitos comprendidos en la ley penal tributaria 27.430.

No obstante, dicha norma no mencionaba en ningún momento que dicho beneficio resultaba aplicable a los imputados por la figura de asociación ilícita fiscal, lo que sí preveía el decreto reglamentario, por lo que la cuestión central recaía en si el decreto en estudio respondía a su carácter estrictamente reglamentario conforme al mecanismo regulado en la CN (art. 99 inc. 2 CN), o si, por el contrario, como lo sostenía ese Ministerio Público, se había extralimitado al extender los efectos de la amnistía a tipos penales que no habían sido expresamente previstos por el legislador, con arreglo a las atribuciones conferidas en los arts. 75 inc. 20 CN, que en el caso concreto, distaba claramente con el espíritu de la norma sancionada por el Congreso.

Indicó que, al respecto, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación había expresado en numerosos fallos, que el Poder Ejecutivo a través del dictado de los decretos reglamentarios, en ejercicio de la potestad que prevé el inc. 2 del art. 99 de la Constitución Nacional, podía fijar los detalles de la ley sancionada por el Congreso, pero en ningún caso, podía alterar su espíritu mediante excepciones reglamentarias, ni menos aún derogar normas legales (Fallos: 322:752, 330:304, 311:2339).

Refirió que el Máximo Tribunal también había expresado que el exceso reglamentario se configuraba cuando una disposición de ese orden desconocía o restringía irrazonablemente derechos que la ley reglamentada otorgaba, o de cualquier modo subvierte su espíritu o finalidad, contrariando de tal modo la jerarquía normativa (Fallos: 337:149; 324:3345;



325:645; 323:2395; 322:1318; 319:3241; 344:2779, disidencia del juez Maqueda).

Que ello lo llevaba a suponer que en una materia de tal importancia como lo era la declaración de la amnistía de una determinada conducta penal, no podía ser sino el mismo Congreso Nacional el único órgano facultado para disponerla, ya que conllevaba necesariamente a desarticular la protección de los bienes jurídicos y la política criminal delineada por él al momento de dictar la norma penal que criminalizaba tal conducta.

De ese modo, sostuvo que, el criterio mayoritariamente aceptado por la doctrina nacional, derivado del principio de legalidad penal (art. 18, Constitución Nacional), no admitía que el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales delegaran en los otros poderes, particularmente en el Poder Ejecutivo, la potestad legislativa penal que la propia Constitución les había conferido con exclusividad, para tipificar y reprimir, como delitos o como contravenciones, ciertas y determinadas conductas humanas (Fallos: 315:2101).

Dijo que, como corolario de ello, tampoco el Poder Legislativo tenía válidamente la posibilidad de desprenderse, a favor de otros poderes del Estado, de su potestad constitucional de desincriminar determinados hechos delictivos, como así tampoco podía delegar al Poder Ejecutivo la facultad de señalar qué delitos resultarán comprendidos en la amnistía (con cita a David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni, *Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial*, Hammurabi, Buenos Aires, 2002, T. 2, p. 594).

Sostuvo que la Corte también había expresado en un sentido similar que el Congreso no podía delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le habían sido expresa e



implícitamente conferidos, y que ese era un principio uniformemente admitido como esencial para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la Constitución y proclamado enfáticamente por ésta en el artículo 29 (Fallos: 148:430).

Que asentada dicha regla general, la Constitución establecía las condiciones o límites bajo los cuales había de operar el caso excepcional en el que el Presidente se encontraba habilitado para dictar decretos legislativos "*de necesidad y urgencia*", supuesto en el que también el mandatario se encontraba vedado de dictar normas en materia penal (art. 99 inc. 3 CN).

De ese modo, refirió que, frente a una ley penal en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional, se observaba que el mencionado decreto presidencial 608/2024, había introducido en el artículo 1 la posibilidad de extinguir la acción penal de la figura por la que se había formulado la acusación en la presente causa, lo que suponía a entender de ese Ministerio, la derogación a través de un acto del Poder Ejecutivo, de una norma dictada por el Legislativo (27.743).

En efecto, la ley 27.743 en ninguno de sus artículos mencionaba que sus beneficios resultan aplicables a personas imputadas en los términos del art. 15.c de la ley 27.430.

Agregó que, lejos de ello, la misma ley establecía en su primer artículo que el fin del Régimen que ella establecía era lograr el pago voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, y en el segundo artículo, que podrían acogerse a él los contribuyentes y responsables de dichas obligaciones.

A su vez, señaló que el artículo 3.d también disponía que el régimen alcanzaba a las obligaciones sobre las que



se hubiera *"formulado denuncia penal (...) contra los contribuyentes o responsables"*.

Indicó que, si bien era cierto que la ley 27.743 no especificaba cuáles eran los tipos penales alcanzados por los beneficios de la regularización de deudas, sí señalaba con absoluta claridad que dicho *"perdón"* se encontraba dirigido a los contribuyentes o los responsables de los tributos evadidos, constituyendo la extensión a la figura prevista en el artículo 15.C una violación al límite reglamentario de la norma cuestionada.

Asimismo, refirió que, como norte interpretativo, debía recordarse que el Congreso había dictado anteriormente normas con beneficios de extinción de la acción en sentido similar, tales como las leyes 27.541, 27.562 y 27.653 en las que la técnica legislativa tampoco se había orientado a enumerar los tipos penales que podían acceder a la *"extinción por pago"*. Pero que en ningún caso se había interpretado que estas leyes abarcaban la situación de personas imputadas según el art. 15.C de la ley 27.430.

En tal sentido, para ese Ministerio resultaba forzado extraer de la letra de la ley que los beneficios del Régimen de Regularización de deudas impositivas podían comprender a personas que no eran las directamente obligadas a realizar el pago, máxime cuando la consecuencia implicaba la extinción de la acción penal pública.

Finalmente, indicó que de los debates parlamentarios de la ley 27.743, tanto en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores, de fechas 29 de abril de 2024 y 16 de junio de 2024 respectivamente, tampoco podían extraerse que hubiera sido objeto de debate o siquiera mencionada la inclusión de la asociación ilícita fiscal prevista en la ley 27.430 como una de las figuras amnistiabiles mediante el régi-



men de regularización de deudas establecido por la norma primero mencionada.

Añadió que se debía recordar que el delito de asociación ilícita fiscal poseía la misma estructura que la del tipo penal previsto en el artículo 210 del Código Penal, por lo que su estructura era la de un delito autónomo, formal y de peligro abstracto, que afectaba el bien jurídico orden público y que se consumaba en el momento en el que los autores se asociaban para delinquir, por el simple hecho de formar parte de la asociación (con cita a Andrés José D'Alessio, *Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado*, La Ley, Buenos Aires, 2011, T. II. p. 1030).

Sostuvo que esto implicaba que se tratara de un delito de pura actividad, con un dolo específico de cometer una serie indeterminada de delitos, lo que significaba la inexistencia de un resultado externo, como sí se verificaba en las figuras de evasión (con cita a Alejandro Tazza, *Código Penal de la Nación Argentina Comentado*, Parte Especial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018, T. II, p. 541).

Así sostuvo lo siguiente: "(...) más allá de que este Ministerio Público tiene en cuenta el cálculo del grave perjuicio económico generado al Estado Nacional como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo por las empresas 'usinas', no puede afirmarse que, en el tipo penal del art 15.c ley 27.430, la el monto dinerario evadido por las usuarias frente al ente recaudador constituya un elemento normativo del tipo, ni, que, consecuentemente, la situación procesal de los imputados por este delito pueda ser resuelta con la conformación de una moratoria y el pago de una determinada suma de dinero.

En ese sentido, en el caso CPE 1476/2016/2/CFC1 "Moncada, Mariano y otros s/recurso de casación" (rta.



9/3/2020 por la sala IV de CFCP), el fiscal señaló que el delito de asociación ilícita tributaria no es uno de los que, en sí mismo, pueda ser objeto de regularización en los términos previstos por el Título II, del Libro II, de la ley 27.260 porque su configuración no presupone el directo e inmediato incumplimiento de alguna obligación tributaria pasible de ser cancelada.

Como dijéramos, es una figura autónoma y diversa a las de evasión tributaria. A fin de clarificar esto, puede advertirse del detalle de los planes de pago informado por ARCA/AFIP que ni **Aún** ni **Villalba Brizuela** ni el resto de los miembros de la presunta asociación ilícita son los titulares de los planes de regularización de deuda, sino que lo son las empresas que utilizaron la estructura criminal desarrollada por los imputados.

Es así que se configura la ridícula situación de que las defensas pretendan la extinción de la acción penal como destinatarios de los beneficios de la ley 27.743, sobre el pago de los tributos evadidos por otros contribuyentes.

En efecto, el interés de la sociedad en perseguir conductas como la de autos radica en el nivel de organización y estructura montado por lo imputados para poder delinquir, y la generación de daño social que ocasiona la magnitud de fenómenos de criminalidad económica como el verificado prima facie en autos, situación que excede con creces la mera evasión impositiva.

VIII. Por todo lo expuesto, esta parte concluye que las regulaciones introducidas por el Poder Ejecutivo en el decreto 608/2024 no suponen el uso de la facultad reglamentaria de una ley en sentido formal, si no una legislación que excede ese marco reglamentario, haciéndose de atribuciones propias del Congreso Nacional y en calidad de legislador.



*En consecuencia, corresponde dictar en este caso concreto, la inconstitucionalidad del art. 1 del decreto 608/2024 y rechazar el pedido de extinción de la acción penal presentado por las defensas. Fiscalía General, 10 de diciembre de 2024” (ver dictamen fiscal incorporado a fs. 20/29 de este incidente).*

**IX.** En ese contexto, la defensa técnica de **Marcelo Oscar Aún** efectuó una presentación, que se encuentra agregada a fs. 30/33 a través del cual solicitó que se requiriera al ente recaudador un informe acerca de si los planes de facilidades otorgados a las empresas Vicbor SRL, Miding SRL, Industrias G&D SA e Industrias Versato SA, cuyos vencimientos operaban en fecha 16 de diciembre del año 2024, habían sido cancelados.

A su vez, pidió que hiciera saber acerca de los períodos y el concepto de las obligaciones fiscales que según había informado, se encontraban en grado de apelación ante el Tribunal Fiscal de la nación.

Por su parte, efectuó otra presentación mediante la cual, luego de efectuar un análisis de las distintas situaciones fiscales en la que se hallaban las firmas indicadas como usuarias/beneficiarias según el informe de ARCA, entendía que, dado el contexto objetivo existente y la vigencia de la amnistía, correspondía la suspensión de la acción penal en curso.

Ello en virtud de que la intención de acogimiento de su defendido a la amnistía fiscal (ley 27.743, y Dto. Reg. N° 608/2.024), ya había sido formalizada con fecha 9 de agosto de 2024, y basándose en que, con respecto de la deuda en discusión administrativa ante el TFN, su defendido **Aún**, no resultaba ser el sujeto pasivo del impuesto, y acorde a lo



probado, infería que dicho adeudo recurrido se encontraba supeditado a una condición objetiva.

Así, sostuvo que: "(...) A todo evento, y dada la vigencia temporal de la amnistía (RG N° 5525/2.024); solicito a VV.EE que de manera urgente en el marco del presente incidente en trámite, requiera, según VV.EE lo estime conveniente del caso, bien sea, al Tribunal Fiscal de la Nación o al ARCA (ex AFIP - DGI ) Dirección Regional Mercedes, para que informe -concretamente- respecto del remanente impago :los impuestos, períodos fiscales y montos de los mismos discutidos ante el TFN; a fin de que mi defendido, se subroque en los derechos del acreedor a efectos de saldar dicho pasivo no exigible, en el caso que el obligado del tributo se desentienda del mismo".

Finalmente, hizo reserva del caso federal.

**X.** Frente a esa presentación, se solicitó al titular de la Dirección Regional Mercedes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que tuviera a bien informar el detalle de los remanentes impagos asociados a los tributos comprendidos en el objeto de este proceso, señalándose concretamente de qué tipo de impuesto se trataba, sus períodos fiscales, montos y si éstos son o fueron discutidos ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

Además, se le pidió que tuviera a bien indicar si los ajustes de las obligaciones tributarias correspondientes a Vicbor SRL, Miding SRL, Industrias G&D SA e Industrias Versato SA, incluidos dentro de los planes de facilidades de pago en curso, habían sido cancelados en su totalidad.

**XI.** Al contestar la vista conferida, el representante de la parte querellante postuló, en primer lugar, que las usuarias y su deuda, no formaban parte del delito de asociación ilícita fiscal, siendo figuras independientes una de



la otra, "pues la gabela cumple un rol específico (que aquí no viene al caso desarrollar) y las usuarias se benefician con el cómputo de las facturas obtenidas de la asociación ilícita".

En cuanto al pedido de extinción de la acción del imputado por amnistía según dto. 608/2024, en la causa por investigación de asociación ilícita tributaria, es una petición que deviene prematura, puesto que aún no se ha podido dar respuesta definitiva con relación a cada una de las usuarias, que como recién fuera indicado se están girando las mismas a las respectivas causas.

Ahora bien, para obtener el beneficio de extinción de la acción penal, a la luz de dicha normativa, se debe acreditar que la deuda regularizada, cancelada o extinguida satisfaga el perjuicio fiscal causado por el delito tributario (en ese caso la asociación ilícita y los usuarios de las facturas apócrifas").

A su vez, informó lo siguiente: "(...) IV. INFORME AJUSTES USUARIAS. Así lo dicho ut supra, en esta instancia de información obtenida dentro de ARCA, se puede aportar la siguiente:

OUTMALL S.A.. CUIT N° 30-71643644-2: CANCELADO

LADY STORK S.A. CUIT N° 30-69878303-2: CANCELADO

ATK S.A. CUIT N° 30-71641597-6: CANCELADO

ENZO STORE S.A. CUIT 30-71641571-2: CANCELADO

MARTIN PABLO GANDARA CUIT 20-22041437-0: CANCELADO

GANDARA SOCIEDAD ANONIMA CUIT N° 30-65827866-1 CANCELADO

VICBOR S.R.L. CUIT N° 30-70933260-7: CANCELADO

MIDING S.R.L. CUIT N° 30-70856559-4: CANCELADO el ajuste conformado ultima cuota el 16/12/2024 (se informa por oficio separado la posible deuda en TFN).



*INDUSTRIAS G&D S.A. CUIT N° 30-71530010-5: CANCELADO el ajuste conformado ultima cuota el 16/12/2024 (se informa por oficio separado la posible deuda en TFN).*

*INDUSTRIAS VERSATO S.A. CUIT N° 30-71550173-9: CANCELADO el ajuste conformado ultima cuota el 16/12/2024 (se informa por oficio separado la posible deuda en TFN)".*

A su vez, adjuntó un detallado informe confeccionado por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes aportando lo requerido por este Tribunal respecto de los remanentes impagos asociados a los tributos comprendidos en el objeto de este proceso.

**XII.** En base a dicho informe, la defensa técnica de **Marcelo Oscar Aún** efectuó una nueva presentación mediante la cual refirió que la totalidad de la obligación tributaria -delitos fiscales- imputados en este expediente a la asociación ilícita investigada y calificada en los términos del art. 15 inc. c) de la Ley Penal Tributaria se encontraba regularizada, en los términos de la Ley de amnistía 27743 y su Decreto reglamentario.

Asimismo, sostuvo que correspondía advertir que el 96% (por ciento) del monto se encontraba totalmente cancelado, y el 4% (por ciento restantes), regularizado mediante planes de pago vigentes tal como la Ley de amnistía citada lo establecía.

Así, sostuvo que al no existir perjuicio fiscal alguno, solicitó que se tuviera presente lo expuesto y, a su turno, resuelva conforme a lo peticionado por esa parte al introducir la incidencia que contaba con la adhesión de otros imputados.

A su vez, presentó otro escrito postulando que, a partir del informe producido por ARCA, correspondía la declaración de extinción de la acción penal en los casos de cancelación de la deuda.



lación total de las obligaciones y suspendida la misma, y el curso de la prescripción, en los supuestos en que se encontraban en curso los planes vigentes aceptados por el ente recaudador.

**XIII.** Al correrse nueva vista a la parte querellante para que se expidiera sobre el planteo de las defensas, en primer lugar, se remitió a su presentación de fecha 13 de febrero del año en curso.

Sin perjuicio de ello, entendió que, para obtener el beneficio de extinción de la acción penal, a la luz de la normativa en cuestión, se debía acreditar que la deuda regularizada, cancelada o extinguida satisficiera el perjuicio fiscal causado por el delito tributario, la asociación ilícita y los usuarios de las facturas apócrifas.

En virtud de ello, entendió que no correspondía la aplicación de la amnistía toda vez que las obligaciones de las usuarias Industrias G&D S.A. e Industrias Versato S.A. no se encontraban canceladas a esa fecha (ver escrito de fs. 27/29).

Frente a ello, el doctor Luis Fernando Charró presentó un escrito efectuando una crítica al dictamen de la parte querellante, exponiendo los motivos y fundamentos de su postura.

**XIV.** Ante ese panorama, a partir de las oposiciones expresadas por el fiscal y la querella, se confirió vista a las defensas para que pudieran controvertir sus argumentos.

**A) Defensa técnica de Marcelo Oscar Aún.**

En primer lugar, a fs. 35/39 presentó un escrito el doctor Luis Fernando Charró, a cargo de la defensa técnica de Marcelo Oscar Aún.



Se remitió y reprodujo sus presentaciones incorporadas a fs. 1, 11/12, 23/26, 27/30, 31/34 y 33/35 que fueron abordadas a lo largo de esta resolución.

Insistió en que había quedado acreditado que las deudas por obligaciones fiscales -delitos tributarios- sometidas a esta jurisdicción se encontraban regularizadas en su totalidad (canceladas y/o en planes de facilidades de pago).

Sostuvo que no había conflicto a dirimir dado que la ARCA que era la autoridad competente asignada por la Ley y así lo había informado al Tribunal ante los pedidos efectuados.

En cuanto al dictamen del Ministerio Público Fiscal dijo que lo allí consignado en el punto II de su dictamen, había perdido toda vigencia en la causa por cuanto la totalidad de la obligación Tributaria derivada estaba cancelada y en un mínimo porcentaje regularizada en planes vigentes conforme a la Ley 27743.

Finalmente hizo reserva del caso federal.

**B) Defensa técnica de Darío Villalba Brizuela.**

Por su parte, a fs. 44/46, el doctor Cristian Pérez, a cargo de la defensa de **Villalba Brizuela**, efectuó una presentación a través de la cual manifestó su adhesión al planteo efectuado por el doctor Charró al entender que aquella exponía con claridad y precisión la situación actual de las obligaciones tributarias cuya regularización era eje del presente incidente.

Refirió que su adhesión se sustentaba en la estricta verificación documental de los informes obrantes en autos, cuya valoración probatoria resultaba insoslayable.

Señaló que coincidía con la invocación del principio de los actos propios: que el organismo fiscal no podía



válidamente modificar su postura dentro del mismo proceso sin fundamento razonable ni cambio sustancial de circunstancias.

Dijo que, adicionalmente, la conducta del ente recaudador, tal como había sido expresada en sus propios actos administrativos incorporados en autos, imponía un límite de congruencia procesal que no podía ser desatendido.

Sostuvo que **Villalba Brizuela** no registraba deuda tributaria pendiente vinculada a los hechos investigados y, en su calidad de sujeto pasivo en este proceso penal, debía poder acogerse a un régimen legal de carácter excepcional y reparador, cuya eficacia no podía quedar a discreción interpretativa, sino que debía juzgarse a la luz de los hechos objetivos verificados.

**C) Defensa técnica de Federico Germán Meier.**

Finalmente, presentó un escrito el defensor oficial ante este tribunal, Alejandro Arguilea, a cargo de la defensa técnica de **Federico Germán Meier**, y manifestó que adhería a las presentaciones efectuadas por las defensas de los imputados **Aún** y **Villalba Brizuela**, en relación con la procedencia del acogimiento al régimen de regularización previsto en la ley 27.743.

Sostuvo que toda vez que las deudas tributarias habían sido canceladas en su gran mayoría, quedando solo una pendiente del cumplimiento de los planes de pago, correspondía disponer la resolución de esta incidencia y el trámite de la causa -de conformidad con lo previsto en el art. 5 de la ley 27.743-, hasta que fenecieran los plazos para el cumplimiento de los planes de pago pendientes.

En segundo lugar, solicitó que se rechazara el planteo de inconstitucionalidad del art. 1 del Decreto 608/2024, reglamentario de la ley 27.743, efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal, toda vez que esa



parte no había fundado la repugnancia entre la norma cuestionada y la Constitución Nacional.

Postuló que el Ministerio Público Fiscal no había expuesto la contradicción exigida para que el tribunal adoptara una decisión de tamaño envergadura, y que la pretendida exclusión de quienes no ostentaban la calidad de “contribuyentes” excedía la letra de la ley, que estableció taxativamente los ilícitos que no encajaban en el régimen y, en ninguno de sus apartados, había mencionado a los partícipes de la asociación ilícita fiscal, como equivocadamente lo consideraba la fiscalía.

Sostuvo que una interpretación adecuada de la norma permitía colegir, sin demasiada dificultad, que estaban incluidas en la “amnistía” todas aquellas personas que no se encontraran condenadas -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos comunes que tuvieran conexión con el incumplimiento de las obligaciones tributarias.

Dijo que la interpretación literal de la norma no habilitaba la exclusión formulada por el Ministerio Público Fiscal.

Refirió que la exégesis de la ley 27.743 que intentaba el Ministerio Público Fiscal se apartaba de su letra, y restringía irrazonablemente los derechos de los justiciables.

Que carecía de sentido concluir que la norma habilitaba la eximición de la sanción penal a los contribuyentes infieles y, a la vez, excluía de esa dispensa a quienes incurrieron en conductas conexas y accesorias de la evasión.

En definitiva, consideraba que la presentación del Ministerio Público Fiscal adolecía de fundamentación adecuada.

**XV.** Así las cosas, se solicitó a la Dirección Regional Mercedes de la Agencia de Recaudación y Control Adua-



nero que tuviera a bien informar el estado de los planes de pago n° T755086 y T755348 (asociado a obligaciones tributarias en cabeza de Industrias G&D S.A.), y del n° T738533 (correspondiente a Industrias Versato S.A.).

Así, según la información incorporada digitalmente el 9 de septiembre de este año, la agencia de mención informó que *"En relación a la contribuyente Industrias G&D SA, los planes T755086 y T755348 se encuentran Vigentes a la fecha. Ello, conforme luce en la respuesta brindada por la Sección Recaudación dependiente de la Agencia N°5.*

*En cuanto a la contribuyente Industrias Versato S.A, se informa que la Agencia donde se encuentra inscripta indica que el plan se encuentra cancelado con anticipacion. Se adjunta informacion que se embebe al presente.*

*Asimismo, se acompaña la Resolución dictada por el Juzgado Federal de Campana, en fecha 23/06/2025 mediante la cual resolvió: "DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL y en consecuencia, SOBRESEER a la contribuyente INDUSTRIAS VERSATO S.A. (CUIT 30-71550173 9) y a sus integrantes Martin Pablo Gandara, Jorge Augusto Nascimiento Dos Santos y Daniel Dorfman, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos investigados en la presente causa nro. FSM 66197/2022 (artículo 5 de la ley 27.743 y artículo 334 y 336, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación y art. 59, inc. 2°, del C.P.N.)." (Atento la cancelación del plan de pagos T 738533)".*

Por su parte, el doctor Luis Fernando Charró efectuó una nueva presentación aportando nueva información y adjuntó un certificado expedido por el Juzgado Federal de Campana.

En virtud de ello, previo a resolver la presente solicitud, se pidió a la Agencia de Recaudación y Control



Aduanero un informe vinculado al estado actual de los planes de pago T755086 y T755348, asociados a la deuda tributaria registrada en cabeza de Industrias G&D S.A.

Que, de acuerdo con lo que surge del informe obrante a fs. 47/59, esa agencia hizo saber que ambos planes poseían una cancelación anticipada con fecha 4 de septiembre del año en curso y adjuntó impresión de pantalla de consulta sobre los mismos.

**Y CONSIDERANDO:**

**El juez Matías Alejandro Mancini dijo:**

I. Corresponde ahora tratar los planteos formulados por las partes, comenzando por el pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 del decreto reglamentario n° 608/2024, dado que su admisión zanjaría la procedencia del planteo de las defensas.

Adelanto que entiendo que corresponde hacer lugar al requerimiento de la fiscalía.

Así, a través de la ley 27.743, publicada en el Boletín Nacional el 8 de julio del año 2024, se estableció un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social con el fin de lograr el pago voluntario de distintas obligaciones fiscales allí detalladas.

A su vez, el Decreto n° 608/2024, publicado el 11 de julio de ese año, reglamentó los principales puntos de la mencionada Ley.

En punto a dicha reforma, la fiscalía ha cuestionado su constitucionalidad por entender que el Poder Ejecutivo se había extralimitado al extender los efectos de la amnistía a tipos penales que no habían sido expresamente previstos por el legislador, con arreglo a las atribuciones conferidas en los arts. 75 inc. 20 de la Constitución



Nacional, que, en el caso concreto, distaba claramente con el espíritu de la norma sancionada por el Congreso.

A su vez, sostuvo que era contraria a diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Considero que, en el presente caso, se dan las circunstancias que se exige para la máxima sanción prevista para una ley conforme la tradición doctrinal marcada por la jurisprudencia de la CSJN.

Al respecto, debe recordarse la doctrina de la Corte en el sentido de que tal declaración constituye un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable; y que cuando conoce en la causa por la vía del art. 14 de la ley 48, la puesta en práctica de tan delicada facultad también requiere que el planteo efectuado ofrezca la adecuada fundamentación que exigen el art. 15 de esa norma y la jurisprudencia de ese Tribunal (Fallos: 226:688; 242:73; 263:309; 300:241; y 305: 1304).

Tal declaración es un último recurso del orden jurídico y *"el único juicio que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental, sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones"* (Fallos: 312:122; 314:407; 314:424).



Y aparte que *"La misión más delicada de la justicia es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su competencia, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes, pues al ser el llamado para sostener la Constitución un poder que avance en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía y el orden público"* (Fallos: 308:1848).

De modo que, para ese control de constitucionalidad, la Corte sostuvo *"el fin y las consecuencias del 'control' encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa, requieren que este requisito de la existencia de un 'caso' o 'controversia judicial' sea observado rigurosamente para la preservación del principio de la división de los poderes"* (Fallo: 310:2342) y que *"la impugnación de las leyes con base constitucional no puede contemplarse en abstracto"* (doctrina de Fallos: 106:109; 182:398; 187:79; 256:602; 259:69; 304:1088; 311:2088; 317:335, 1224, entre otros).

Estas pautas me llevan a estudiar, al momento de analizar la constitucionalidad de una ley, las circunstancias concretas que causan agravio junto con la supuesta irrazonabilidad o inequidad de la norma que la parte en su desarrollo argumental esgrime, para finalmente determinar si se configura y justifica el pronunciamiento pretendido.

A este respecto, entiendo que, por las razones esgrimidas por la fiscalía, corresponde hacer lugar a lo planteado por ella, y declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 del decreto 608/2024, en cuanto a la aplicabilidad de la amnistía prevista en la ley 27.743 al delito en que fueron encuadrados los hechos que hacen al objeto de este proceso.



En este sentido, la Constitución Nacional organiza, sobre la base del principio republicano, un complejo y delicado sistema de reparto de competencias entre los distintos poderes del Estado Federal, compuesto por un esquema de balances y contrapesos, orientado a evitar que cualquiera de esos departamentos concentre demasiadas atribuciones, de modo que puedan existir abusos que alteren ese diagrama.

Y la función básica del Poder Legislativo es, justamente, la de sancionar leyes en sentido formal, esto es, normas jurídicas, generales y obligatorias, dictadas de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional.

Este instrumento, que conduce el funcionamiento del derecho argentino e integra el conjunto de cuerpos jurídicos ubicados en lo más alto de su escala jerárquica, reserva, en principio, a las leyes en sentido formal la regulación de aspectos fundamentales de la vida política, lo que significa que, salvo en circunstancias excepcionales (que provocan la necesidad de emitir decretos de la misma naturaleza, que no aplican a este caso), no es válido aplicar esas pautas cuando no siguieron el procedimiento constitucional.

Entre esos asuntos que, por regla general, está prohibido regular por fuera del procedimiento de la ley formal, están precisamente las amnistías, para las que rige el principio de *reserva de ley*, porque implican nada menos que la despenalización de una conducta que estaba penalmente tipificada, es decir, sometida también a ese ámbito de reserva legal.

Por su parte, en el artículo 99, la Constitución Nacional confiere al Poder Ejecutivo otro rol con relación a las leyes en sentido formal:



*"2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.*

*3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.*

*El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.*

*Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros".*

*Esto quiere decir que el papel regular del departamento administrativo tiene que ver con la emisión de decretos reglamentarios, esto es, que contengan regulaciones que no supongan modificaciones a lo contemplado por el Congreso, sino que solamente lo precisen.*

*En este sentido, el Congreso Nacional sancionó la ley 27.743, que, entre otros varios aspectos asociados a la materia tributaria, creó el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social, y expresó que su finalidad está vinculada a "lograr el pago voluntario de las obligaciones que en el presente título se detallan". En ese marco, se previó "la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren" (art. 1).*



Al precisar a los posibles beneficiarios de esa herramienta jurídica, se consignó a *"Los contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos"*, del mismo modo que se hizo alusión a las obligaciones que se pretendía cobrar con la sanción del instrumento, especificándose, en lo que aquí interesa, que el régimen se hace extensivo a *"Toda obligación fiscal que no se encuentre expresamente excluida en el artículo 4° de la presente ley"* (arts. 2 y 3).

Luego, la ley detalla las consecuencias derivadas del acogimiento al régimen: *"La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen."*

*También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen"* (art. 5).

Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional emitió, mediante el decreto n° 608/2024, una reglamentación de



aquella ley (lo que fue expresamente plasmado así en sus fundamentos), que, en lo que aquí importa, establece en su primer artículo que *"La cancelación de las obligaciones incluidas en el marco de lo previsto en el Régimen del Título I de la Ley N° 27.743, producirá la extinción de la acción penal -en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación- respecto de todos los partícipes, así como también de las personas imputadas por delitos fiscales comunes enumerados en los artículos 8°, 9°, 10, 11 y 15, inciso c), del Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificatorias, si dichas imputaciones se vinculan a obligaciones tributarias incluidas o canceladas bajo el presente Régimen, o que hubieran sido canceladas con anterioridad"*.

Sobre esta base, entiendo que queda en evidencia que el objetivo de esa amnistía, a partir del texto plasmado en la ley y de su discusión parlamentaria, es dejar de penalizar conductas asociadas al incumplimiento de obligaciones tributarias concretas a partir de su pago en determinadas condiciones, y que su decreto reglamentario extrapoló aquellas consecuencias a las imputaciones asociadas a las asociaciones ilícitas fiscales, cuya descripción típica no prevé ese comportamiento, sino el formar parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos previstos en el *Régimen Penal Tributario* contemplado en la ley 27.430.

Sobre la relación que tiene la asociación ilícita fiscal frente a los delitos concretados en ese marco de organización, se expresó ya la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en cuanto a su carácter autónomo, que, llegado el caso, daría cuenta de un concurso real, por



tratarse de hechos independientes y que, en consecuencia, hace inaplicable a aquella figura la amnistía asociada al pago de obligaciones tributarias incumplidas (*Moncada*, causa n° **CPE 1.476/2016/2/CFC1**, del 09/03/2020).

En definitiva, el decreto traslada las mismas consecuencias (la impunidad) a otro supuesto de hecho, no contenido en la ley (la asociación ilícita fiscal).

Sin perjuicio de esto, no me escapa tampoco que uno de los integrantes la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ha sostenido la validez del decreto aquí discutido (Sala IV, *Santiago*, causa n° **FCB 12000035/2012/TO1/6/CFC3**, voto en disidencia del juez Barroetaveña).

Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 del decreto n° 608/2024 del Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto a la aplicabilidad de la amnistía prevista en la ley 27.743 al delito en que fueron encuadrados los hechos que hacen al objeto de este proceso, según lo establecido por los artículos 75, incs. 12° y 20°, 99, incs. 2° y 3°, y 116 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, propongo también rechazar el pedido de acogimiento de las defensas a la amnistía prevista en la ley 27.743.

**El juez Héctor Omar Sagretti dijo:**

Que adhiere al voto que antecede, por compartir, en lo sustancial, sus fundamentos.

Por todo lo expuesto, este tribunal;

**RESUELVE:**

**I. DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 1° DEL DECRETO N° 608/2024 DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL**, en cuanto a la aplicabilidad de la amnistía prevista en la ley 27.743 al



delito en que fueron encuadrados los hechos que hacen al objeto de este proceso, según lo establecido por los artículos 75, incs. 12° y 20°, 99, incs. 2° y 3°, y 116 de la Constitución Nacional.

**II. RECHAZAR EL PEDIDO DE ACOGIMIENTO DE LAS DEFENSAS DE MARCELO OSCAR AÚN, DARÍO VILLALBA BRIZUELA Y FEDERICO GERMÁN MEIER,** cuyos datos personales figuran en el encabezado, **A LA AMNISTÍA PREVISTA EN LA LEY 27.743.**

**III.** Notifíquese, regístrese y publíquese.

Ante mí:

Se cumplió. Conste.



**NOTA:** para dejar constancia de que el juez Esteban Carlos Rodríguez Eggers no firmó esta resolución por hallarse en uso de licencia. Es todo de lo que dejo constancia a los 21 días de octubre de 2025.



#39187623#476890100#20251021082052664